

## **Introducción a los Informes de País 2010 sobre las Prácticas de Derechos Humanos**

Este informe proporciona detalles enciclopédicos sobre la situación de los derechos humanos en el 2010 en más de 190 países. Como al publicar este informe ya han pasado tres meses del nuevo año, nuestros enfoques de muchos temas están ahora enmarcados en los notables cambios que se extienden por todos los países de Oriente Medio en el 2011. En este momento no podemos predecir cuál será el resultado de estos cambios, ni sabremos cuáles serán las repercusiones duraderas en los años venideros. La dinámica interna en cada uno de estos países es diferente, lo que torna inadecuado realizar un análisis generalizado de toda la región. En países como Túnez y Egipto, estamos presenciando demandas populares de participación política significativa, de libertades fundamentales y de mayores oportunidades económicas. Estas exigencias son profundas, locales y están siendo impulsadas por nuevos activistas, muchos de ellos jóvenes. Estos ciudadanos procuran construir democracias sostenibles en sus países con gobiernos que respeten los derechos humanos universales de sus ciudadanos. Si tienen éxito, la región de Oriente Medio mejorará, y con ella, el mundo entero.

Los Estados Unidos continuarán vigilando estrechamente las situaciones en estos países, sabiendo que la transición a la democracia no es automática y requerirá tiempo y minuciosa atención. En Egipto, aguardamos la finalización del estado de emergencia, como ha prometido hacer el Consejo Supremo de las fuerzas armadas antes de las elecciones parlamentarias. En Túnez, la creación de un comité de investigación para investigar los abusos de los derechos humanos que tuvieron lugar durante la revuelta es muy alentadora.

Mientras abordamos estas consecuencias a corto plazo y otras, los historiadores tendrán el beneficio del tiempo y de la perspectiva para ayudarnos a entender qué desencadenó estos movimientos populares. Pero tres tendencias contribuyeron claramente a su desarrollo y a otros cambios que se produjeron en todo el mundo en el 2010. La primera es el crecimiento explosivo de las organizaciones de defensa no gubernamentales centradas en una gama amplia de cuestiones y causas relacionadas con la democracia y los derechos humanos. Hace cincuenta años, cuando se creó Amnistía Internacional, pocos países excepto América del Norte o Europa occidental tenían organizaciones locales de derechos humanos. Hoy existen organizaciones locales no gubernamentales (ONG) en casi todos los países del mundo. El crecimiento de estas organizaciones ha sido notable, y en muchos países estas organizaciones de ciudadanos se han creado en contra de todos los pronósticos y solo porque los activistas a favor de los derechos humanos individuales estaban dispuestos a enfrentar un gran riesgo personal. La Secretaria

Clinton destacó la importancia de estas organizaciones en un discurso presentado en la Comunidad de las Democracias en julio del 2010 en Cracovia, Polonia. Como ella dijo, las "sociedades avanzan cuando los ciudadanos que conforman estos grupos están facultados para transformar los intereses comunes en acciones comunes al servicio del bien común".

En las sociedades cerradas, donde los gobiernos represivos procuran controlar y reprimir el debate sobre temas políticos y sociales delicados, los gobiernos ven a estas organizaciones independientes locales de ciudadanos como una amenaza en lugar de un recurso y a los defensores de la democracia y de los derechos humanos se les reserva un tratamiento particularmente severo. Por ejemplo, en Belarús, más de 700 activistas a favor de la democracia, entre ellos siete candidatos presidenciales, fueron detenidos durante las manifestaciones públicas después de las imperfectas elecciones presidenciales en diciembre del 2010. En las semanas que siguieron, las oficinas y los hogares de representantes de la sociedad civil, periodistas independientes y activistas políticos fueron allanados como parte de un esfuerzo de represión de la actividad política independiente y la libertad de expresión.

En los últimos años, más de 90 gobiernos han procurado aprobar leyes y regulaciones restrictivas, obstaculizando la capacidad de las organizaciones para matricularse, funcionar libremente o recibir financiamiento extranjero. Una propuesta de ley para las ONG en Camboya, presentada en diciembre, es emblemática de estos esfuerzos. La ley impondría a las ONG requisitos onerosos en materia de informes, erigiría barreras significativas al registro de las ONG extranjeras, requeriría que las ONG extranjeras colaboren con el gobierno y declarararía ilegales a las ONG no matriculadas. En Etiopía, una nueva ley de organización de la sociedad civil entró en vigor en febrero, después de un período de gracia de un año. La ley prohíbe a las instituciones de beneficencia, las sociedades y las asociaciones que reciben más del 10 por ciento de su financiamiento de fuentes extranjeras participar en actividades que promuevan los derechos humanos y la democracia; los derechos de los niños y las personas discapacitadas; la igualdad entre las naciones, las nacionalidades, las personas, los sexos y las religiones; la resolución de conflictos o conciliación; y la promoción de la justicia. Durante el período de gracia, las principales organizaciones de Etiopía de defensa de los derechos humanos se adaptaron matriculándose como instituciones locales de beneficencia, lo cual significa que no podrían recaudar más del 10 por ciento de sus fondos de donantes extranjeros, o como "Instituciones Internas de Beneficencia", que permitía donaciones pero prohibía actividades en las áreas enumeradas. Habían 3.522 organizaciones matriculadas antes de que la

ley de organización de la sociedad civil fuera adoptada; después de la ley quedaron sólo 1.655.

La Secretaria Clinton reconoció estas penosas restricciones para la sociedad civil en su discurso en Cracovia, cuando identificó un "grupo de países donde se están cercenando las organizaciones cívicas" y advirtió que cuando los "gobiernos toman medidas restrictivas contra el derecho de los ciudadanos a colaborar, como lo han hecho a lo largo de la historia, las sociedades caen en el estancamiento y el deterioro". Como hemos visto en el Oriente Medio y en otras partes, los gobiernos no pueden reprimir la sociedad civil indefinidamente, y nunca pueden reprimirla legítimamente.

La segunda tendencia importante es el notable crecimiento de Internet, los teléfonos móviles y otras tecnologías de conexión que permiten las comunicaciones instantáneas a miles de millones de personas en todo el mundo. Como la Secretaria Clinton observó en un discurso reciente sobre la libertad en Internet, este medio se ha convertido en la plaza del pueblo del siglo XXI. Mucho se ha dicho y se ha escrito acerca de los efectos de estas tecnologías de comunicación que permitieron a los egipcios y a los tunecinos movilizarse en las semanas y los meses anteriores a que empezaran realmente las manifestaciones. Si bien es el coraje de las propias personas que abrió el camino y fue la fuerza impulsora no se puede negar el impacto amplificador de estas nuevas tecnologías, unidas al poder de las estaciones de televisión y de Internet para transmitir los videos obtenidos por los ciudadanos usando estos teléfonos móviles.

Hoy hay más de dos mil millones de personas con acceso a Internet en la mayoría de los países del mundo, y alrededor de cinco mil millones de suscripciones a teléfonos celulares. Se espera que estas cifras crezcan extraordinariamente en los próximos 15 años. Y en la medida en que un mayor número de personas obtengan acceso a estas extraordinarias tecnologías, y las usen tanto para recabar e impartir información sobre los derechos humanos como para comunicarse con otros activistas, cada vez más gobiernos dedicarán más tiempo, más dinero y más atención a los esfuerzos para reducir el acceso a estos nuevos medios de comunicación. Más de 40 gobiernos están usando ahora una combinación de restricciones regulatorias, controles técnicos en el acceso a Internet, y tecnologías diseñadas para reprimir la expresión y coartar la privacidad personal de los que usan estas tecnologías que están evolucionando rápidamente.

En Arabia Saudita en el 2010, el gobierno restringió el acceso a Internet e interfirió con la privacidad de los ciudadanos cuando estaban conectados. La Comisión de Tecnologías de la Información y la Comunicación (CITC), organismo oficial,

vigiló indebidamente el correo electrónico y las salas de charla interactiva en Internet y bloqueó sitios, incluidas las páginas sobre el Hinduismo, el Judaísmo, el Cristianismo y ciertas formas de Islamismo consideradas incompatibles con la Sharia y las normativas nacionales. En el Sudán, el gobierno vigiló las comunicaciones en Internet y, durante las elecciones, bloqueó el acceso al sitio web del Monitor del Voto del Sudán. El Gobierno de China controló estrechamente el contenido en Internet y el acceso a este medio y detuvo a aquellos que expresaron puntos de vista críticos del gobierno o de sus políticas. En Vietnam, el gobierno orquestó los ataques contra los sitios web críticos y espía a los autores de blogs disidentes. La policía detuvo a 25 disidentes en el curso del año y entró por la fuerza en los hogares de otros para confiscar las computadoras personales, los teléfonos celulares y otro material.

La tercera tendencia, y una que apunta en una dirección negativa, fue el aumento continuo de la violencia, la persecución y la discriminación social y oficial de miembros de grupos vulnerables, a menudo pertenecientes a minorías étnicas, raciales, religiosas, o a mayorías despojadas de poder. En muchos países este modelo de discriminación se hizo extensivo a las mujeres; niños; personas discapacitadas; personas indígenas; lesbianas, homosexuales, bisexuales y transgénero (LGBT); y miembros de otros grupos vulnerables que carecían de poder político para defender sus propios intereses. A menudo a los miembros de estos grupos les fueron negadas oportunidades económicas o la capacidad de respetar sus tradiciones o prácticas culturales o sociales, o encontraron restricciones en su capacidad de expresarse libremente, de reunirse pacíficamente o de formar asociaciones u organizaciones.

En el Pakistán, continuaron las violaciones de libertad de culto y la violencia y la discriminación contra las minorías religiosas. Se aplicaron las leyes contra la blasfemia para hostigar a las minorías religiosas así como a musulmanes vulnerables o a musulmanes con puntos de vista minoritarios. (En los dos primeros meses del 2011, asesinaron brutalmente a dos funcionarios gubernamentales de alto rango que desafiaron públicamente estas leyes.) En Arabia Saudita, hubo severas restricciones en la libertad de culto y la discriminación religiosa fue común. En China, el gobierno siguió demonizando al Dalai Lama y reprimió con severidad a los musulmanes de la etnia Uighur en Xinjiang y a los budistas tibetanos. Hubo informes de aumentos de actos antisemitas en todo el mundo, entre otros la profanación de cementerios, pintadas y retóricas del libelo de sangre, así como la denegación, el revisionismo y la glorificación del Holocausto. También ha habido picos en las expresiones antisemitas durante los eventos en el Oriente Medio.

Las personas en todo el mundo siguen experimentando discriminación e intimidación basada en su orientación sexual o identidad de género. Honduras vio un repunte en los asesinatos de los miembros de la comunidad LGBT por autores desconocidos. Entretanto, en muchas naciones africanas, de Oriente Medio y del Caribe, las relaciones entre personas del mismo sexo siguen siendo un delito penal, y a través de tales leyes y otras medidas el estado refirma y promueve la discriminación social y la intolerancia. En Uganda, por ejemplo, la intimidación y el acoso de las personas LGBT empeoraron durante el año y algunos dirigentes gubernamentales y líderes religiosos amenazaron a las personas LGBT.

La explotación de los trabajadores fue también un problema en muchos países, a menudo multiplicado por las amenazas contra los trabajadores por intentar sindicalizarse. Nuevamente en el 2010, el gobierno de Uzbekistán movilizó miles de adultos y niños como trabajadores forzados durante la cosecha anual de algodón. En Bangladesh, las condiciones deficientes de trabajo causaron muertes innecesarias, en particular en la industria de la confección. En Bangladesh fueron también frecuentes y a veces letales los actos de agitación laboral durante el año, en particular en el Sector de Vestimenta Confeccionada y en las Zonas Francas Industriales.

Estas tendencias se abordan en las secciones siguientes, ilustradas con pequeños bosquejos de 27 países (en orden alfabético por región). La sección sobre los aspectos destacados de los países proporciona ejemplos ilustrativos de las tendencias de los derechos humanos en el 2010. En algunos de estos países ha habido acontecimientos negativos o el historial de derechos humanos presenta una mezcla de acontecimientos positivos y negativos. En otros países, reflexionamos sobre las tendencias positivas en el 2010. La parte principal de este informe es un examen mucho más minucioso de estos países y de otros 167.

El 2010 marca el 35° año que el Departamento de Estado ha compilado los *Informes de País sobre las Prácticas de Derechos Humanos*. El informe de este año abarca la situación de los derechos humanos en 194 países. Lo que empezó como respuesta a un mandato del Congreso de informar sobre la situación de los derechos humanos en los países que estaban recibiendo asistencia de los Estados Unidos a mediados de los años setenta se ha convertido en un análisis detallado de la situación de los derechos humanos en todos los países que son miembros de las Naciones Unidas. Los informes de país presentan un panorama de la situación de derechos humanos en todo el mundo como una forma de mayor sensibilización acerca de las condiciones de los derechos humanos, en particular debido a que estas condiciones repercuten en el bienestar de las mujeres, los niños, las minorías raciales y religiosas, las víctimas de la trata de personas, los miembros de grupos

autóctonos y comunidades étnicas, las personas discapacitadas, las minorías sexuales, los refugiados y los miembros de otros grupos vulnerables.

Así como ha aumentado el alcance de los informes del Departamento de Estado, también ha aumentado el uso de estos informes en todo el mundo. Además de suministrar información al Congreso para fundamentar sus decisiones de financiamiento y de políticas, estos informes se usan en todo el gobierno de los Estados Unidos y por muchos gobiernos extranjeros. Y, en gran medida, estos informes los usan cada vez más los ciudadanos y las ONG como fuentes esenciales de información sobre lo que está sucediendo en el mundo. Para facilitar el intercambio de esta información, los informes se traducen a más de 50 idiomas y pueden consultarse en línea.

El gobierno de los Estados Unidos compila el informe sobre los derechos humanos porque creemos que es imperativo para los países, incluso para el nuestro, para garantizar que el respeto de los derechos humanos sea un elemento integral de la política exterior. Suministramos estos informes como una forma de examen y análisis integrales.

Los informes no comprenden los derechos humanos en los Estados Unidos, aunque este gobierno ha contraído un compromiso para examinar detallada y objetivamente nuestro propio desempeño en estas cuestiones mientras ponemos en relieve las prácticas de otros países. En noviembre, el gobierno de los Estados Unidos presentó su primer informe sobre los derechos humanos en los Estados Unidos al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (UNHRC) en Ginebra a través del examen periódico universal. En preparación para ese informe realizamos extensas consultas en los Estados Unidos con una amplia gama de organizaciones civiles y líderes de las comunidades indígenas americanas. El mes pasado comparecimos nuevamente en la reunión del UNHRC en Ginebra para informar sobre nuestra respuesta a las recomendaciones que otros gobiernos nos formularon.

Nosotros también presentamos informes continuamente sobre nuestro propio historial en materia de derechos humanos de conformidad con nuestras obligaciones estipuladas en los tratados. En enero del 2010, presentamos los informes periódicos acerca de nuestra ejecución de los protocolos facultativos de la Convención sobre los Derechos del Niño. En el 2011 presentaremos los informes periódicos con respecto a la ejecución del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Contra Tortura y la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial. En el 2010, por primera vez, el *Informe sobre la trata de personas* del Departamento de Estado incluyó una sección sobre

los Estados Unidos, clasificando a los Estados Unidos con las mismas normas con que clasifica a otros países.

Una última palabra acerca de la elaboración de estos informes. Estos 194 informes de país son integrales y hasta exhaustivos. Su elaboración es un cometido hercúleo que requiere esfuerzos extraordinarios de un equipo de funcionarios talentosos y dedicados en materia de derechos humanos en las embajadas estadounidenses en todo el mundo, y en sus contrapartes en Washington, D.C., con personal entregado a su trabajo en la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo. El equipo de cada país recopila, analiza y sintetiza información de diversas fuentes, entre otras, las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, otros gobiernos, organismos multilaterales y los miembros de la sociedad civil. Una vez que los informes se han redactado, son sometidos a un riguroso proceso de comprobación y revisión de los datos para asegurar que responden a estrictas normas de precisión y objetividad.

### **Aspectos destacados de cada país**

En el 2010, muchos gobiernos en todo el mundo siguieron cometiendo graves violaciones y abusos de los derechos humanos. Los siguientes párrafos describen la situación de los derechos humanos y las tendencias clave en países específicos donde los abusos fueron especialmente graves. También dirigimos la atención a Ucrania, que en 2010 dio un paso atrás después de los acontecimientos positivos en años anteriores. La sección empieza con una exposición de varios países—Colombia, Guinea, Indonesia—que se destacan por los notables acontecimientos positivos en materia de derechos humanos en el 2010.

**Colombia** es un país donde hubo marcadas mejoras en la situación de los derechos humanos en el 2010. Poco después de asumir su cargo en agosto, el Presidente Santos y su gobierno fortalecieron la relación del gobierno con la sociedad civil y los defensores de los derechos humanos, manteniendo sesiones consultivas de alto nivel, expresando públicamente su apoyo a los defensores de los derechos humanos y haciéndolos participar en el diálogo además de apoyar los esfuerzos para imponer mayores sanciones en casos de amenazas y violencia contra los defensores de derechos humanos. El gobierno impulsó una Ley de Víctimas y de Tierras para prever la restitución de tierras y las indemnizaciones a las víctimas. Las ejecuciones extrajudiciales disminuyeron sustancialmente desde 2008 y 2009, y varios funcionarios militares de alto rango fueron condenados por abusos de los derechos humanos. Algunos de estos abusos continuaron, como por ejemplo, algunas amenazas contra los defensores de derechos humanos y los sindicalistas. El Ministerio de Defensa empezó a ejecutar un convenio con la oficina del Alto

Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para controlar las medidas del ministerio para mejorar la adhesión a los derechos humanos.

En diciembre del 2010, **Guinea** inauguró el primer presidente elegido democráticamente desde la independencia de Francia en 1958. El líder, Alfa Condé, opositor de larga data, candidato del partido Agrupación del Pueblo de Guinea, fue elegido presidente por el electorado después de dos rondas de elecciones. Aunque hubo actos aislados de violencia después de la segunda ronda, las elecciones en general fueron consideradas libres y justas.

El respeto de los derechos humanos en **Indonesia** siguió mejorando en el 2010, 12 años después de la transición del país a la democracia. Aunque persistieron algunas fallas en el sistema judicial, el Presidente Susilo Bambang Yudhoyono, reelegido democráticamente en julio del 2009, continuó siendo un fuerte partidario del estado de derecho y la rendición de cuentas y la sociedad civil, y los medios de comunicación se siguieron contando entre los más fuertes en Asia. Continuó la profesionalización de los militares, aunque hubo algunos abusos graves de los derechos humanos por parte del personal militar, en particular en Papúa, y los castigos, cuando se aplicaron, a menudo no estaban acordes con los crímenes cometidos.

## **ÁFRICA**

**Côte d'Ivoire** terminó 2010 en un enfrentamiento por la presidencia, después de las elecciones en octubre en las que el Presidente Laurent Gbagbo en ejercicio de sus funciones, candidato del Frente Popular Marfileño, y Alassane Ouattara, líder del partido opositor, candidato de la Agrupación de los Republicanos, avanzaron hasta la segunda votación presidencial el 28 de noviembre. El 2 de diciembre, la Comisión Electoral Independiente declaró a Ouattara el ganador con 54,1 por ciento de los votos frente a 45,9 por ciento de Gbagbo. La elección fue declarada justa y democrática por las Naciones Unidas y las misiones de observadores internacionales y domésticas. Gbagbo se negó a aceptar los resultados, alegando fraude entre los votantes e intimidación en varias regiones, y tanto Ouattara como Gbagbo juraron el cargo el 3 de diciembre. Al finalizar el año, el Presidente Ouattara operaba su gobierno desde el Golf Hotel en Abidján bajo un bloqueo por fuerzas partidistas de Gbagbo. Gbagbo retuvo el control de los recursos estatales, entre ellos la estación de televisión nacional, las fuerzas de seguridad y la hacienda pública. Hubo informes fidedignos de abusos de derechos humanos durante esta época. El 16 de diciembre, las fuerzas de seguridad abrieron fuego contra los defensores del Presidente Ouattara durante una marcha de protesta. Al menos 20 personas murieron, muchos más fueron heridos, y cientos detenidos. En el plazo de

una semana, del 15 al 22 de diciembre, la Misión de las Naciones Unidas en la división de derechos humanos de Côte d'Ivoire informó sobre 173 personas muertas, 90 sometidas a torturas y malos tratos, otras 471 arbitrariamente arrestadas y detenidas y 24 personas desaparecidas. La abrumadora mayoría de estos casos de asesinatos extrajudiciales, tortura, detención y desaparición fue cometida por las fuerzas de seguridad fieles a Gbagbo. Las violaciones de los derechos humanos que tuvieron lugar después del 31 de diciembre no están documentadas en el informe del 2010.

Graves abusos de los derechos humanos continuaron en toda la **República Democrática del Congo (RDC)**, en particular en el este y el nordeste del país, donde hay abundancia de minerales y están afectadas por los conflictos, y donde la autoridad estatal continuó ausente o extremadamente débil. Los defensores de los derechos humanos han sido intimidados, golpeados y, como en el caso del prominente activista Floribert Chebeya, asesinados. Organizaciones armadas—entre las que se encuentran elementos de las fuerzas de seguridad estatales—perpetraron abusos con total impunidad y se dedicaron a la explotación ilegal y el comercio de los recursos naturales, en particular de los minerales. Los ingresos obtenidos del comercio ilícito de los minerales, parte de los cuales se utilizaron para financiar el conflicto armado, desataron constante inseguridad en el este del país, agravando una situación ya precaria de los derechos humanos. Los grupos rebeldes y las milicias en el este del país siguieron participando en campañas de violaciones y saqueo en su afán por controlar las comunidades cerca de las lucrativas áreas mineras, beneficiándose de las ganancias relacionadas con la minería que sostuvieron el conflicto y los abusos consiguientes. Fuentes creíbles como el Grupo de Expertos de las Naciones Unidas en la RDC presentaron datos que indicaban que algunas cadenas de distribución congoleñas y de empresas internacionales tuvieron su origen en base a proveedores que comerciaron con las organizaciones armadas—entre los que cabe citar elementos de las fuerzas de seguridad estatales—que cometieron graves abusos de los derechos humanos.

**Nigeria** siguió plagada de graves abusos de los derechos humanos durante el año. Miembros del servicio de seguridad como la policía, los militares y oficiales del Servicio de la Seguridad del Estado, cometieron asesinatos extrajudiciales y torturaron, golpearon y maltrataron a manifestantes, sospechosos de delitos, detenidos y prisioneros declarados culpables. La Fuerza Conjunta, formada en el 2003 con el fin de restaurar la estabilidad en el Delta del Níger y conformada por servicios militares, policiales y de seguridad, condujo allanamientos de grupos militantes y delincuentes sospechosos, lo que dio lugar a numerosas muertes y lesiones tanto entre los presuntos delincuentes y como en la población civil. La corrupción fue generalizada en todos los niveles del gobierno y en todas las fuerzas

de seguridad. La violencia étnica y religiosa también dio lugar a asesinatos y desplazamientos durante el año. En enero y marzo tuvieron lugar dos serios ataques en Jos y las tierras agrícolas circundantes. Hasta 1.000 personas, principalmente mujeres, niños y ancianos, fueron asesinados, muertos a hachazos, o quemados vivos.

La violencia continuó en el **Sudán** durante el 2010. Las elecciones celebradas en abril en toda la nación no fueron consideradas ni justas ni libres por la comunidad internacional y los observadores notaron numerosos problemas en todo el proceso. En Darfur, las luchas entre el gobierno, las milicias patrocinadas por el gobierno, los grupos rebeldes y los grupos étnicos siguieron matando, hiriendo y desplazando a la población civil. Esta violencia ocasionó la muerte de 2.321 personas durante el año, según las Naciones Unidas, un aumento en comparación con las 875 personas muertas en 2009. El gobierno continuó realizando bombardeos aéreos. La violencia por razones de género, el uso de niños soldados y la obstrucción de las organizaciones humanitarias y de la operación híbrida de la Unión Africana y las Naciones Unidas en Darfur continuaron siendo un problema. El gobierno hostigó, detuvo y golpeó a los miembros de sociedad civil en el norte. En el sur de Sudán, los conflictos armados entre los grupos étnicos y el Ejército de Resistencia del Señor siguieron cobrándose vidas y desplazando a la población civil. Según los cálculos de las Naciones Unidas, la violencia en el sur ocasionó la muerte de unas 986 personas y el desplazamiento de 223.708 durante el año. La inscripción para el referéndum de autodeterminación del Sudán del sur tuvo lugar en noviembre y diciembre. La falta de progreso en los preparativos para otro referéndum para decidir si la región fronteriza de Abyei debe formar parte del norte o del sur causó actos aislados de violencia y crecientes tensiones en esos lugares.

En **Zimbabwe**, las fuerzas de seguridad, la policía, y facciones del gobierno dominadas por la Unión Nacional Africana de Zimbabwe-Frente Patriótico (ZANU-PF) continuaron cometiendo numerosas violaciones graves de los derechos humanos con impunidad, y hasta torturas, contra todos los activistas políticos y miembros del partido no alineados con la ZANU-PF, líderes estudiantiles y activistas cívicos. La ZANU-PF mantuvo el control y la manipulación del proceso político mediante cargos fabricados y arrestos arbitrarios, intimidación y corrupción, anulando eficazmente el derecho de los ciudadanos de cambiar su gobierno. Aunque hubo menos incidentes en la primera mitad del 2010, las expectativas de elecciones en el 2011 llevaron a un aumento del número de casos de acoso e intimidación de las organizaciones civiles y de los miembros de los medios de difusión hacia el final del período de notificación. El gobierno continuó usando leyes represivas para suprimir la libertad de expresión, extensivas a los miembros de la prensa, la libertad de reunión, de asociación y de

movimiento. Las fuerzas militares y otros agentes gubernamentales también continuaron con los abusos en el sector de diamantes de Marange.

## ***ASIA ORIENTAL Y EL PACÍFICO***

A pesar de la liberación de Aung San Suu Kyi, más de 2.100 prisioneros políticos seguían detenidos en **Birmania** a fines del 2010. Muchos activistas cívicos fueron detenidos indefinidamente y sin acusaciones, y las organizaciones patrocinadas por el régimen participaron en el acoso y abuso de activistas de los derechos humanos y de la democracia. El gobierno infringió sistemáticamente la privacidad personal y restringió la libertad de expresión, de prensa, de reunión, de asociación, de culto y el movimiento de las personas. El gobierno no permitió que las ONG domésticas de derechos humanos funcionaran independientemente, y las ONG internacionales enfrentaron un clima difícil. Las elecciones del otoño del 2010 no fueron ni libres ni justas. El gobierno siguió controlando estrictamente las actividades del clero budista. Las fuerzas militares en Birmania continuaron con sus flagrantes abusos y violaciones contra la población civil en las regiones donde viven minorías étnicas, entre otros, violaciones, tortura, reubicación forzada de personas y trabajos forzados. Persistieron la violencia y la discriminación social contra las mujeres y las comunidades religiosas minoritarias, al igual que el reclutamiento ilegal de niños soldados y la trata de personas, en particular de mujeres y niñas. Los derechos de los trabajadores siguieron restringidos y también persistieron los trabajos forzados, incluidos los de los niños.

En **Camboya**, los miembros de las fuerzas de seguridad, actuando con impunidad, cometieron asesinatos arbitrarios. Los sistemas de vigilancia de los derechos humanos dan cuenta de arrestos arbitrarios y detención prolongada antes del juicio, poniendo de relieve un poder judicial débil y la denegación del derecho a un juicio justo. Continuaron las restricciones de libertad de reunión y de expresión, aun para los miembros de la prensa, y hubo un creciente abuso de juicios por difamación y desinformación que tenían como blanco las voces de la oposición. La sociedad civil expresó una gran preocupación de que el proyecto de Ley sobre las asociaciones y las ONG podría, si se adoptara, constreñir seriamente el funcionamiento de las ONG. El proyecto de ley dado a conocer en diciembre incluía disposiciones que impondrían a las ONG requisitos onerosos en materia de elaboración de informes, impediría a las asociaciones con menos de 21 miembros lograr personería jurídica (requisito luego reducido a 11 miembros, lo que lo hace todavía oneroso), erigiría barreras onerosas para la inscripción de ONG extranjeras, requeriría que las ONG extranjeras colaboraran con el gobierno y proscibiría las ONG no inscritas. Los empleadores continuaron sus actividades contra los sindicatos y continuó el débil

cumplimiento de las leyes laborales, y la explotación laboral infantil continuó siendo un problema en el sector no estructurado.

En **China**, siguió la tendencia negativa en las áreas clave de los derechos humanos. El gobierno redobló las restricciones contra abogados, activistas, autores de blogs y periodistas; hizo más estrictos los controles de la sociedad civil; y aumentó los intentos de limitar la libertad de expresión y controlar la prensa, Internet y el acceso a Internet en el 2010. Las autoridades también aumentaron el uso de medidas extralegales, entre otras, las desapariciones forzadas, el estricto arresto domiciliario, la detención arbitraria en centros de detención extralegales o "cárceles negras" y otras formas menores de arresto para silenciar voces independientes y castigar a activistas y a sus familias. El activista jurídico Chen Guangcheng quedó bajo arresto domiciliario, junto con su esposa e hijo, al igual que otros prisioneros políticos liberados. Los abogados defensores de los intereses públicos, que trabajaban dentro del marco jurídico de China, fueron expulsados del Colegio de Abogados, golpeados o "desaparecidos" por aceptar defender a clientes y cuestiones que el gobierno consideraba delicadas. Autores de blogs y administradores de sitios web han sido detenidos y acusados de "subversión del poder estatal" por volver a publicar un tweet o administrar un sitio web donde otros publicaron comentarios. El gobierno también continuó con la grave represión cultural y religiosa de las minorías étnicas en la Región Autónoma de Xinjiang Uighur y en las zonas tibetanas.

En **Corea del Norte**, la situación de los derechos humanos seguía siendo sombría. Durante el año, el gobierno mantuvo el control estricto de la circulación de información dentro y fuera del país. El gobierno les negó a sus ciudadanos el derecho a las garantías procesales y arbitrariamente arrestó y detuvo a las personas, incluso por delitos políticos. Los desertores y las ONG indicaron que hubo abusos graves y sistemáticos de los derechos humanos en toda la extensa red de prisiones y centros de detención del país. Además, el gobierno siguió aplicando rígidos controles de las libertades de expresión, de prensa, de reunión, de asociación, de culto y de movimiento y los derechos de los trabajadores. No había ninguna organización nacional independiente de vigilancia de los derechos humanos, y el gobierno negó acceso a las organizaciones internacionales y a las ONG extranjeras, lo que imposibilitó evaluar con exactitud el verdadero alcance de los abusos que ocurren en el país o la validez de estos informes.

El gobierno de **Vietnam** siguió suprimiendo la disensión, aumentó el control de la prensa y limitó la libertad de expresión, de reunión, de movimiento y de asociación. Las personas fueron detenidas arbitrariamente por actividades políticas y se les denegó el derecho a juicios justos y rápidos. El gobierno detuvo a al menos

25 activistas políticos, condenó a 14 disidentes detenidos en el 2008, el 2009 y el 2010 y rechazó las apelaciones de otros 10 disidentes condenados a fines del 2009. El sistema judicial sufrió fuertes distorsiones por la influencia política, la corrupción endémica y la ineficiencia. La libertad de culto siguió estando sujeta a interpretación y protección dispares, en particular a nivel provincial y pueblerino. La libertad en Internet estaba aun más restringida porque el gobierno orquestó ataques contra los sitios web críticos del gobierno y espió a autores de blogs disidentes. El gobierno limitó el derecho de los trabajadores a formar sindicatos independientes y a afiliarse a ellos.

## ***EUROPA***

Las autoridades en **Belarús** arbitrariamente detuvieron, arrestaron y encarcelaron a los activistas partidarios de la democracia, a los periodistas y representantes de la sociedad civil. Tras la imperfecta elección presidencial de diciembre del 2010, las autoridades iniciaron una serie de amplias medidas enérgicas contra los manifestantes, deteniendo cerca de 700 personas y allanando las oficinas y los departamentos pertenecientes a los miembros de los medios independientes, de las ONG y de la oposición política. A más de 40 personas, entre ellas varios candidatos presidenciales, les espera ahora un máximo de 15 años de cárcel. Con detenciones y juicios, el gobierno de Belarús continuamente está generando nuevos prisioneros políticos. El poder judicial carecía de independencia y adoleció de corrupción, ineficiencia e interferencia política; a menudo los resultados de los juicios estaban preestablecidos, y muchos juicios se realizaron a puerta cerrada. La corrupción oficial en todo el gobierno siguió siendo un problema.

En **Rusia**, el gobierno infringió la libertad de expresión, de reunión y de asociación, deteniendo a ciertos manifestantes y continuó presionando a ONG selectas, los medios independientes, algunas minorías religiosas, sindicatos independientes y la oposición política. Continuaron los asesinatos y los ataques contra periodistas y activistas. Hubo informes de abuso físico por las fuerzas de la ley, muertes por novatadas militares y duras condiciones de prisión. Las violaciones de las normas jurídicas y de las garantías procesales continuaron siendo un problema, y la corrupción del gobierno fue generalizada. Los ataques por motivos xenofóbicos, étnicos y raciales y los crímenes motivados por el odio siguieron siendo un considerable problema. El conflicto entre el gobierno y los insurgentes, los militantes islámicos y los grupos delincuentes en la región situada al norte del Cáucaso desembocó en numerosas violaciones de los derechos humanos por todos los partidos, que realizaron supuestamente asesinatos, tortura, abuso, violencia y secuestros por motivos políticos.

En **Ucrania**, a pesar de empezar con elecciones presidenciales libres y justas, la tendencia general para el 2010 fue negativa debido a las difíciles elecciones locales, la intimidación de los medios y la prosecución de las figuras de la oposición percibida como selectiva. Los observadores internacionales y nacionales encontraron que las elecciones locales de octubre no se cumplieron con las mismas normas de la elección presidencial, alegando el registro de listas fraudulentas de candidatos de la oposición, la presión del gobierno contra monitores y candidatos electorales y funcionarios del proceso electoral, excluyendo o eliminando selectivamente a los candidatos de las boletas electorales – todo lo cual provocó preocupación acerca de los siguientes pasos planificados por el gobierno para la reforma electoral. Además, hubo numerosos informes indicando que las autoridades intentaron dirigir el contenido de los medios e intimidar a periodistas. Aunque el gobierno adoptó medidas en el 2009 para combatir mejor la corrupción, la comunidad internacional expresó preocupación de que la política motivó la investigación penal por el nuevo gobierno del 2010 de 30 miembros del gobierno anterior por supuesta corrupción; varias de estas personas fueron arrestadas y posteriormente acusadas.

### ***CERCANO ORIENTE***

Las tensiones políticas estallaron en las semanas anteriores a las elecciones de octubre en **Bahrein**. El gobierno arrestó a más de 200 chiitas acusados de incitación o participación en la violencia callejera. Algunos de los detenidos, pero no todos, eran líderes de dos grupos, Haq y Wafa', que rechazan la monarquía y pidieron un boicot de las elecciones. El gobierno acusó a 23 de los detenidos de participar en una "red terrorista" de conformidad con la ley de contraterrorismo de 2006. El proceso electoral también fue empañado por la desautorización del gobierno de los sitios web y los boletines informativos de los dos principales partidos legales de la oposición. El gobierno no permitió a los observadores internacionales vigilar las elecciones. El gobierno también continuó restringiendo la libertad de reunión y de asociación. Las fuerzas de seguridad intervinieron en las manifestaciones y limitaron y controlaron las reuniones políticas durante el año. A las ONG y los grupos civiles se les exigió que se inscribieran con el gobierno y le suministraran las listas de los afiliados. En septiembre, el Ministerio de Desarrollo Social eficazmente cerró un organismo local de derechos humanos, la Sociedad de Derechos Humanos de Bahrein, a través de un decreto ministerial que ordenó la disolución de la junta directiva de la sociedad y nombró a un empleado del ministerio para que fuera jefe provisional del grupo.

Según múltiples fuentes, el Gobierno de **Irán** ejecutó a unas 312 personas en ejecuciones sumarias durante el año, muchos después de juicios que se realizaron

en secreto o sin garantías procesales. En muchos casos, las personas ejecutadas supuestamente por delitos criminales, como el tráfico ilícito de estupefacientes, eran en realidad disidentes políticos. Las autoridades retuvieron a los prisioneros políticos y siguieron tomando medidas enérgicas contra los reformadores de los derechos de la mujer, los activistas de los derechos de las minorías étnicas, activistas estudiantiles y minorías religiosas. Hubo poca independencia judicial y pocos juicios públicos justos. El gobierno restringió con severidad el derecho a la privacidad y las libertades civiles, incluidas la libertad de expresión, incluso para los miembros de la prensa, la libertad de reunión, de asociación y movimiento y colocó severas restricciones a la libertad de culto. Grupos de vigilantes continuaron atacando a jóvenes considerados "no islámicos" en su manera de vestir o por sus actividades, invadiendo hogares privados, abusando a parejas no casadas y perturbando conciertos. Persistieron la violencia y la discriminación legal y social contra la mujer, los niños, las minorías étnicas y religiosas y las personas LGBT.

Si bien las elecciones nacionales parlamentarias creíbles y legítimas en las 18 provincias el 7 de marzo reflejaron un logro significativo para el avance de los derechos humanos, la violencia de los extremistas, unida al desempeño del gobierno poco enérgico en la defensa del estado de derecho, dio lugar a abusos generalizados y graves de los derechos humanos en **Iraq**. Hubo informes indicando que el gobierno o sus agentes cometieron numerosos asesinatos arbitrarios o ilegales, detenciones arbitrarias y actos de tortura ligados a sus operaciones de seguridad, a menudo con impunidad. Los ataques por Al-Qaeda en Iraq y otros extremistas siguieron contra las Fuerzas de Seguridad Iraquíes (ISF), los funcionarios gubernamentales y la población civil, a menudo tenían como blanco las zonas urbanas, las iglesias cristianas, los mercados chiitas y las mezquitas. El 10 de mayo, bombardeos y disparos coordinados resultaron en no menos de 119 muertes, entre ellos miembros de la ISF y agentes del orden público. El 17 de agosto, un atacante suicida se inmoló en medio de una multitud de reclutas en Bagdad, matando a 61 personas. Durante el año, murieron 962 personas pertenecientes al Ministerio del Interior y 1.347 fueron heridas. Los agentes de policía, en particular, eran los blancos de estos actos.

En **Libia**, el Coronel al-Qadhafi y sus asociados cercanos monopolizaron cada aspecto de la toma de decisiones en el gobierno. Los continuos problemas de derechos humanos incluyeron la tortura, los arrestos arbitrarios, la impunidad oficial y las condiciones deficientes en las cárceles. Un número grande pero desconocido de personas permanecía detenido o en prisión por participar en actividades políticas pacíficas o por pertenecer a una organización política ilegal. El gobierno restringió significativamente la libertad de los medios y siguió restringiendo la libertad de expresión, y se vigilaron por lo común las llamadas

telefónicas y el uso de Internet, y hasta la comunicación por correo electrónico con países extranjeros. También había vigilancia física de activistas políticos y organizaciones extranjeras. El gobierno era dueño de todos los medios impresos y de radiodifusión y los controló en la práctica, y los medios controlados por el gobierno no publicaron ni transmitieron opiniones incompatibles con la política oficial. La Organización de Seguridad Nacional acosó sistemáticamente a los periodistas, y las disposiciones excesivamente amplias del código penal sirvieron como base para frecuentes acusaciones de difamación penal. El gobierno restringió con severidad la libertad de reunión y permitió las reuniones públicas solo si eran aprobadas con antelación. El gobierno restringió el derecho de asociación y en general solo les permitió funcionar a las instituciones afiliadas con el gobierno; ninguna ONG funcionó en el país. En los primeros meses del 2011, las protestas estallaron en todo el país. Como tuvieron lugar en el 2011, no están documentadas en el informe de 2010.

En **Siria**, las fuerzas de seguridad cometieron asesinatos ilegales, detuvieron a activistas políticos y aquellos a favor de los derechos humanos, y torturaron y maltrataron físicamente con impunidad a los prisioneros y detenidos. El gobierno también encarceló a varios miembros destacados de las comunidades de derechos humanos y de la sociedad civil, además de los 2.500 a 3.000 prisioneros políticos que se calcula habían sido detenidos anteriormente. La detención prolongada antes del juicio y la detención incomunicada seguían siendo un grave problema, y los tribunales usaron sistemáticamente como pruebas las "confesiones" extraídas bajo coacción. Raramente se investigaron las denuncias de tortura por parte de los acusados. El gobierno restringió con severidad las libertades universales de expresión, de reunión y asociación, de culto y el movimiento.

### ***ASIA MERIDIONAL Y CENTRAL***

Una situación de seguridad cada vez más difícil en **Afganistán** dio lugar a varios graves abusos de los derechos humanos. La población civil siguió siendo víctima del conflicto armado intensificado con un aumento de 15 por ciento de las muertes relacionadas con el conflicto durante el año, comparado con el 2009. El gobierno y las fuerzas internacionales partidarias del gobierno fueron responsables de las muertes de civiles, específicamente del 16 por ciento de todos los civiles muertos. El Observatorio de Derechos Humanos informó que a menudo no hubo rendición de cuentas por parte de las fuerzas ni se realizaron averiguaciones oportunas ni transparentes en caso de ilícitos si los miembros de la población civil fueron heridos o asesinados. Los ataques de los talibanes e insurgentes, entre los que se cuentan los asesinatos con tonos políticos, aumentaron tanto en número como en intensidad. Al menos 30 personas murieron el 18 de septiembre, día de las

elecciones parlamentarias y los talibanes se adjudicaron la responsabilidad por la muerte de tres candidatos durante el período de la campaña entre julio y agosto. En agosto, cinco trabajadores de la campaña que apoyaban a Fauwzia Gilani en Herat fueron secuestrados y asesinados. Hubo también ataques contra los funcionarios del proceso electoral. Las elecciones mismas se vieron empañadas por fraude electoral e irregularidades generalizadas, como el establecimiento de un tribunal especial para investigar los resultados electorales y las denuncias; la baja concurrencia de votantes; y la falta de condiciones necesarias para la participación de las mujeres. El gobierno estaba asolado por la impunidad oficial y la corrupción y a menudo no logró realizar las investigaciones eficaces de los abusos de los derechos humanos cometidos por las fuerzas locales de seguridad. El arresto y la detención arbitrarios seguían siendo un problema, y el poder judicial carecía de independencia. La libertad de culto estaba seriamente restringida, como también el derecho a cambiar de religión. Las mujeres siguieron haciendo frente a abusos generalizados de los derechos humanos, entre otros la violencia, los ataques de insurgentes contra la educación de las niñas, el acceso limitado a la justicia y otras restricciones en sus derechos.

En **Pakistán**, las imputaciones de asesinatos extrajudiciales y la detención de civiles por las fuerzas de seguridad fueron reportadas por varios medios de difusión y las ONG. Durante el año, se produjo un aumento significativo del número total de casos de tortura reportados y casos de violación de detenidos, casi el doble que en el 2009. La Sociedad para los Derechos Humanos y de Ayuda a Prisioneros (SHARP) reportó el asesinato de 72 civiles después de enfrentamientos con la policía y 168 muertes en las cárceles, un aumento con respecto al año anterior. Los atentados de militantes y terroristas en las cuatro provincias y en las zonas tribales administradas por el gobierno siguieron causando muertes y heridos. Según el informe, los ataques terroristas y extremistas y las operaciones contra el terrorismo y el extremismo causaron la muerte de 7.400 personas, de las cuales casi 1.800 eran civiles, más de 450 pertenecían a las fuerzas de seguridad y más de 5.100 eran terroristas o insurgentes. Hubo numerosos informes de asesinatos por motivos políticos en Karachi y Balochistán. Según un informe de *Dawn*, 1.981 personas perdieron la vida a raíz de la violencia política en Karachi, de las cuales 748 fueron asesinatos planeados. Según el Observatorio de los Derechos Humanos, el asesinato y la desaparición planeados de líderes, activistas y civiles de Baloch aumentaron en el 2010. Persistieron las violaciones de la libertad de culto y la violencia y la discriminación contra las minorías religiosas. Algunas personas acusadas de blasfemia contra el islam fueron condenadas a cadena perpetua o a la pena de muerte. Uno de ellos fue Aasia Bibi, una mujer cristiana que fue condenada a la pena de muerte en noviembre, convirtiéndose en la primera mujer en recibir una sentencia tan severa por blasfemia.

**Uzbekistán** siguió encarcelando a las personas por motivos políticos. Si bien un prisionero político, el activista de los derechos humanos Farhad Mukhtarov, fue liberado durante el año, 13 a 25 prisioneros políticos continuaron detenidos, y los familiares informaron que muchos prisioneros fueron torturados. Los activistas de los derechos humanos, sus familiares y los miembros de ciertos grupos religiosos informaron haber sido víctimas de acoso y arrestos por la policía y otros miembros de las fuerzas de seguridad. La libertad de expresión fue seriamente limitada y el acoso de los periodistas aumentó durante el año. Los periodistas de medios impresos y de radiotelevisión sufrieron arrestos, intimidación y violencia por parte de la policía y los servicios de seguridad, como también restricciones burocráticas en sus actividades. Los códigos penales y administrativos previeron multas significativas por libelo y difamación y el gobierno los acusó de libelo, calumnia y difamación para castigar a los periodistas, los activistas de derechos humanos y otros que criticaron al presidente o al gobierno. También la libertad de asociación estaba restringida. El gobierno controló estrechamente la actividad de las ONG y reglamentó a los grupos islámicos y de minorías religiosas mediante estrictas restricciones legales con respecto a los tipos de grupos que podrían formarse e inscribirse. El trabajo forzado adulto e infantil ocurrió durante la cosecha del algodón.

## ***EL CONTINENTE AMERICANO***

El gobierno de **Cuba** liberó a más de 40 prisioneros políticos durante el período que cubre este informe, entre los cuales se encuentran muchos destacados activistas de derechos humanos detenidos en el 2003, aunque la mayoría fue liberada con la condición de que abandonen el país. Cuba siguió teniendo docenas de otros prisioneros políticos. El gobierno suprimió los derechos humanos y las libertades fundamentales, entre otras la libertad de expresión, de prensa, de reunión y asociación, de movimiento y de culto. Los grupos de derechos humanos observaron un marcado aumento del uso de arrestos por períodos cortos con el objetivo de entorpecer el trabajo de la sociedad civil y hostigar a los activistas. Además, el gobierno siguió presentando protestas públicas para acosar y maltratar a los activistas y sus familias, en particular a las Damas de Blanco. Aunque el gobierno calificó a las muchedumbres como espontáneas, con frecuencia los participantes llegaban en vehículos estatales o eran reclutados en los lugares de trabajo o las escuelas vecinas por líderes locales del partido comunista. En casos extremos, las turbas orquestadas por el gobierno asaltaron a estas personas o dañaron sus hogares o sus propiedades. Los miembros de las fuerzas de seguridad vigilaron, acosaron y a veces atacaron físicamente a los partidarios de los derechos humanos y de la democracia, los disidentes, los periodistas independientes, los

detenidos y prisioneros, y lo hicieron con impunidad. El gobierno no reconoció el periodismo independiente, e impuso prohibiciones de viaje, detenciones, acoso, confiscación de equipos y amenazas de encarcelamiento a algunos periodistas independientes. Las reuniones no autorizadas de más de tres personas pueden recibir un castigo de hasta tres meses en prisión y una multa, aunque estas reuniones tenían mayores probabilidades de ser dispersadas que penalizadas.

El respeto de los derechos humanos y las instituciones democráticas se deterioró durante el último año en **Nicaragua**. Se les negó la libertad de reunión a los miembros de partido opositor que participaron en protestas. Las elecciones regionales de marzo del 2010 en la costa del Caribe se vieron empañadas por imputaciones de irregularidades generalizadas, y a las ONG domésticas legítimas les fue negado el permiso para observar la elección. Otras cuestiones incluyen la politización de los órganos judiciales y gubernamentales, la injerencia sustancial del gobierno en la libertad de los medios de comunicación, y el acoso de las ONG y los periodistas. La policía no protegió a los manifestantes que protestaron las políticas del gobierno y permitió que los grupos partidarios del gobierno participaran en actos de violencia. El gobierno siguió criticando a los líderes religiosos que expresaron preocupación por las prácticas y las políticas del gobierno que afectaban la participación pública y las libertades democráticas. Los funcionarios del gobierno vilipendiaron públicamente a los funcionarios de la iglesia católica quienes denunciaron la manipulación del proceso electoral.

En **Venezuela**, el gobierno usó el poder judicial para intimidar y perseguir a personas y organizaciones que criticaron las políticas y acciones del gobierno, tales como los manifestantes pacíficos, los periodistas, un juez, los miembros de partidos políticos opositores, las ONG, los dirigentes sindicales y empresariales y los ciudadanos comunes. Los funcionarios del gobierno también restringieron la libertad de expresión, hostigando e intimidando a los canales privados de televisión, medios de comunicación y periodistas con amenazas, embargos de propiedades, regulaciones específicas e investigaciones penales y enjuiciamientos. A finales de diciembre la Asamblea Nacional adoptó un paquete de leyes que socavaban aun más los principios y las prácticas democráticos en Venezuela, una de esas leyes delega la autoridad legislativa al ejecutivo sobrepasando la duración del mandato de la Asamblea Nacional saliente, en violación de los valores compartidos de la Carta Democrática Interamericana, y otras leyes que imponían nuevas restricciones a los medios independientes, Internet, los partidos políticos y las ONG.